



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-00061-00
PROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CONVOCANTE: SARA CRISTINA NIÑO SANCHEZ
CONVOCADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

La Procuraduría 195 Judicial I para Asuntos Administrativos, remitió solicitud de aprobación o improbación de conciliación extrajudicial celebrada entre **SARA CRISTINA NIÑO SANCHEZ**, actuando en representación propia, y **CESAR JULIO GALLO MARQUEZ** en su condición de apoderado de la convocada **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, según acta calendada el 14 de febrero de 2020, celebrada dentro de la Conciliación Extrajudicial No. 796956 del 18 de diciembre del 2019, donde se decidió conciliar los valores adeudados por dicha entidad a la convocante, al no incluir, como parte integrante la asignación básica, la reserva especial del ahorro y la posterior liquidación de la **prima de actividad y bonificación por recreación**, para el periodo comprendido entre el 4 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019.

La entidad convocada, propuso conciliar el anterior concepto por la suma final de **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS (\$1.866.401,00)** mcte, correspondiente al valor del capital adeudado.

La convocante manifestó estar de acuerdo y aceptar en su totalidad la oferta conciliatoria realizada por la parte convocada.

Como respaldo del acuerdo conciliatorio, se arribó al trámite los siguientes documentos:

- Copia del derecho de petición presentado por Sara Cristina Niño Sánchez ante el Superintendente de Sociedades, el 23 de octubre del 2019, por medio del cual solicita el reconocimiento y pago de las diferencias generadas al omitir la reserva especial del ahorro en la liquidación de la prima de actividad y la bonificación por recreación (fl.1)
- Copia de la certificación laboral expedida por la Coordinadora Grupo de Administración de Personal donde se establecen los valores de la asignación básica del empleo de la convocante, y la liquidación en la cual se constatan los

emolumentos, objeto de conciliación, adeudados a la señora Sara Cristina Niño Sánchez (fl.3).

- Copia del oficio por medio del cual la convocante, **Sara Cristina Niño Sánchez**, aceptó la liquidación propuesta por la Superintendencia (fl. 4).
- Solicitud de conciliación presentada por la convocante Sara Cristina Niño Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación (fls.6-9).
- Copia de la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 10)
- Poder conferido al abogado Cesar Julio Gallo Márquez, como apoderado judicial de la Superintendencia de Sociedades (fls.53)
- Copia de la formula conciliatoria propuesta por la Secretaría del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Superintendencia de Sociedades (fl. 73).

Así las cosas, procede el Despacho a definir si aprueba o no la conciliación prejudicial, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa se remitirán dentro de los tres días siguientes al "*Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que le imparta su aprobación o improbación*".

Mediante la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho 1069 de 2015, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2009, se determinaron los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa y su artículo 2.2.4.3.1.1.2., estableció lo siguiente:

"Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 Y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Parágrafo 2°. *El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.*

Parágrafo 3°. *Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.*

Parágrafo 4°. *En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de qué trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.*

Parágrafo 5°. *El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.”*

Si bien es cierto que la conciliación extrajudicial en materia administrativa es una de las vías más céleres y no litigiosas para la resolución de conflictos, no es menos cierto, que debe cumplir con las exigencias requeridas dentro del marco de la Constitución Política, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, para su consecuente aprobación.

Así las cosas, tenemos que los requisitos para la aprobación del acuerdo conciliatorio son los establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 18 de julio de 2007, Rad 1998-00249-01 (28106) con ponencia de la Doctora Ruth Stella Correa Palacio, que si bien, se profirió en vigencia del derogado Código Contencioso Administrativo, de manera conceptual ilustra de forma veraz las exigencias para aprobar lo acordado, en efecto señaló la Corporación:

- “1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el arto 81 ley 446 de 1998).*
- 2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 ley 23 de 1991 y 70 ley 446 de 1998).*
- 3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.*
- 4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A ley 23 de 1991 y arto 73 ley 446 de 1998).”*

Dichos requisitos deben concurrir simultáneamente, porque al faltar uno de ellos, la conciliación debe ser improbada.

Acorde a los lineamientos expresados, **EL DESPACHO APROBARÁ LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** por los siguientes motivos:

1. No ha operado el fenómeno de la caducidad.

El asunto materia de conciliación es susceptible de reclamarse judicialmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se trata del reconocimiento de la diferencia causada por la no inclusión de la denominada reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica, para la posterior liquidación de **la prima de actividad y la bonificación por recreación**, respecto del servidor público convocante y vinculado a la

Superintendencia de Sociedades por el periodo comprendido entre **el 4 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019.**

El Despacho precisa que la conciliación adelantada conforme los medios de prueba allegados al plenario, surte sus efectos para el reajuste de la asignación básica por haberse omitido la inclusión de la reserva especial de ahorro y la consecuencial liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación, por el periodo comprendido entre el 4 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019.**

Así las cosas, al no haberse reconocido los valores del reajuste por omitir la reserva especial del ahorro en la asignación básica y la posterior liquidación **de la prima de actividad y la bonificación por recreación, de la señora Sara Cristina Niño Sánchez, en el periodo comprendido entre el 4 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019,** es claro que el medio de control correspondiente no se encontraba caducado y respeta el criterio de prescripción en torno a los derechos laborales, que es de tres años contados a partir de que se hizo exigible el derecho a reclamar.

2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles.

Se observa que el reclamo se refiere de manera concreta al pago de los valores adeudados por concepto de la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación,** para el periodo comprendido entre **el 4 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019,** siendo un asunto que si bien concierne a derechos laborales ciertos e indiscutibles, son de connotación económica, por lo que son susceptibles de transacción bajo tales condiciones, máxime cuando de lo pretendido y del acuerdo se verifica que el convocado tiene derecho a la prestación reclamada, pues así se desprende de la formula conciliatoria presentada por la Superintendencia de Sociedades.

3. Las partes están debidamente representadas.

La parte convocante actúa en representación propia, a quien se le reconoció personería para actuar como tal.

De igual manera, la **Superintendencia de Sociedades,** confirió poder al abogado **Cesar Julio Gallo Márquez,** tal y como se constata a folio 53 del expediente.

4. El acuerdo no viola la ley, cuenta con las pruebas necesarias y no afecta el patrimonio público.

Pues bien, la señora **Sara Cristina Niño Sánchez,** según se desprende de la información allegada a la actuación reclamó ante la Superintendencia de Sociedades, el reconocimiento y pago de los valores adeudados por concepto de la diferencia causada por la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la liquidación **de la prima de actividad y la bonificación por recreación.**

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia calendada el 10 de mayo de 2001, definió la titularidad del reconocimiento de algunas prestaciones económicas a favor de los trabajadores y empleados de las Superintendencias. La Corporación en su momento expresó:

La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANONIMAS, como entidad de previsión social, tendrá a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales consagradas en las normas vigentes para los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores, de la misma Corporación, en la forma que dispongan sus estatutos y reglamentos internos, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias".

En desarrollo de este objeto, el artículo 3° del mismo decreto enumeró las funciones de la corporación, dentro de las cuales conviene resaltar las dos primeras, a saber:

- 1. Organizar, dirigir y administrar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales de los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores y de la misma Corporación.*
- 2. Atender las prestaciones a que se obligue en favor de sus afiliados, beneficiarios, pensionados y adscritos especiales.*

1) El decreto ley 1695 del 27 de junio de 1997 dispuso la supresión de Corporanónimas y ordenó su liquidación. En el artículo 12 le asignó a las respectivas superintendencias el pago de los beneficios económicos que ella tenía a su cargo. Este artículo establece lo siguiente:

*"Pago de beneficios económicos.- El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo"*¹

Conforme a lo expuesto, es claro que la **Superintendencia de Sociedades**, asumió el reconocimiento de las prestaciones económicas contenidas en el Acuerdo 040 de 1991, por el cual se establece el reglamento general de servicios.

Al desarrollar el capítulo de las prestaciones económicas, en el artículo 58 del Acuerdo 040 de 1991, se consagró la reserva especial del ahorro, con el siguiente alcance:

"Artículo 58. Contribución al fondo de empleados. Reserva especial del ahorro. Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas, entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica, y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%), previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley."

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero ponente: CÉSAR HOYOS SALAZAR. Bogotá D.C, diez (10) de mayo de dos mil uno (2001). Radicación número: 1349. Actor: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Adicionalmente, dicho Acuerdo, determinó que Corporanónimas reconocería y pagaría las primas y demás reconocimientos determinados por la ley.

En lo que respecta a la reserva especial del ahorro, el Consejo de Estado ha determinado que dicho emolumento constituye factor salarial, bajo los siguientes argumentos:

“Como lo ha planteado la Corporación en numerosas oportunidades, tal como lo precisa el artículo 127 del C.S.T. “Constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la denominación que se adopte...”

Significa lo anterior que no obstante el 65% del salario se haya denominado reserva especial de ahorro, como no se ha probado que el pago de esta suma tenga causa distinta a la del servicio que presta el funcionario e indudablemente es factor salarial, “forzoso es concluir que se trata de salario y no de una prestación social a título de complemento para satisfacer las necesidades del empleado o su familia; es decir, forma parte de la asignación mensual que devengaba la actora”, como se sostuvo en la aludida providencia del 31 de julio de 1997.

En consecuencia, constituyendo salario ese 65% pagado mensualmente al funcionario por CORPORANOMINAS, ha debido tenerse en cuenta para liquidarle la bonificación, ya que equivale a asignación básica mensual.

No de otra manera debe entenderse dicho pago, pues de no ser así, significaría que se está recibiendo a título de mera liberalidad y ello no puede efectuarse con fondos del tesoro público.

Considera la Sala que la circunstancia de que ese porcentaje de la asignación básica fuera cancelado por “CORPORANOMINAS”, entidad diferente de la Superintendencia de Sociedades, no constituye un obstáculo legal para su inclusión en la liquidación de la bonificación, ya que las mismas disposiciones que establecieron que el salario de los funcionarios de la Superintendencia estuviera a cargo de dos entidades diferentes, permiten también esa liquidación. No tendría razón de ser que fuera legal el pago mensual del salario en dicha forma e ilegal el tomar la asignación mensual básica completa para efectos de la bonificación por retiro.”²

Por consiguiente, la liquidación de la reserva especial del ahorro como parte de la asignación básica en razón a su naturaleza salarial, es uno de aquellos elementos que retribuye directamente la prestación del servicio y en el entendido que los artículos 44 del Acuerdo 040 de 1991 y 144 del Decreto 708 de 2009, al fijar la cuantía con fundamento en la asignación básica, no excluían la reserva especial del ahorro, circunstancia que ratifica la viabilidad del acuerdo conciliatorio que nos atañe en el presente asunto.

Ahora bien, mediante certificación expedida por la Secretaría del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Superintendencia de Sociedades, se señalaron los valores totales objeto de conciliación y respecto de los cuales ha de efectuarse

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA - SUB-SECCION “A”. Consejero ponente: NICOLAS PAJARO PEÑARANDA. Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1.998). Radicación número: 13910. Actor: ALFREDO ELIAS RAMOS FLOREZ. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

el reajuste, conforme la solicitud presentada por la convocante, atendiendo los siguientes valores:

FUNCIONARIO EXFUNCIONARIO PÚBLICO	Y/O	FECHA DE LIQUIDACIÓN PERIODO QUE COMPRENDE MONTO TOTAL POR CONCILIAR
SARA CRISTINA NIÑO SÁNCHEZ		04/09/2017 AL 23/10/2019 \$1.886.401

Valores debidamente discriminados en certificación expedida por la coordinadora del grupo de trabajo de administración personal, obrante a folio 3 del expediente.

En lo que respecta a las condiciones en las cuales se cumplirá la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio, se tiene que el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Sociedades, determinó que las condiciones generales en materia de las controversias suscitadas en la reliquidación de las asignaciones básicas con inclusión de la reserva especial del ahorro, concretándose en los siguientes lineamientos:

- “1.-Valor: Reconocer la suma de \$1.866.401 pesos m/te., como valor resultante de reliquidar los factores reclamados, para el periodo comprendido entre el 04 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019, incluyendo allí el factor denominado reserva especial del ahorro, conforme a la liquidación efectuada por la entidad y aceptada por el convocante.

2. No se reconocerán intereses ni indexación, o cualquier otro gasto que se pretenda por la convocante, es decir, solo se reconoce el capital conforme a la liquidación realizada por la entidad.

3. Se debe tener en cuenta la prescripción trienal de las sumas indicadas, conforme la certificación aludida.

4. Pago: Los valores antes señalados serán cancelados dentro de los 60 días siguientes a aquél en el la Jurisdicción Contenciosa Administrativa apruebe la conciliación, no generando intereses tampoco en este lapso.

5. Forma de pago: El pago se realizará, mediante consignación en la cuenta que el funcionario tenga reportada en la entidad para el pago de nómina, salvo indicación en contrario de la solicitante, comunicada a la entidad al momento de elevar la petición de pago, o en todo caso, antes de efectuarse el pago respectivo.

Así mismo, que no iniciarán acciones contra la Superintendencia de Sociedades que tenga que ver con el reconocimiento de las sumas relativas a Prima de Actividad y Bonificación por Recreación, a que se refiere esta conciliación”.

En consecuencia, es procedente que la entidad realice el pago de los valores adeudados al servidor público por concepto de la diferencia causada en la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro, como parte integrante de la asignación básica para la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, pues como ha quedado evidenciado, la convocante tiene derecho a dicho reconocimiento, y la entidad realizó las operaciones relacionadas con el recalcu para efectos prestacionales para el periodo comprendido entre el **04 de septiembre del 2017 al 23 de octubre del 2019**; en ese sentido, el despacho considera que lo reclamado tiene el sustento legal y jurisprudencial apropiado, es decir, es ajustado al ordenamiento jurídico.

En tal virtud, el presente acuerdo no vulnera el ordenamiento jurídico, cuenta con las pruebas necesarias y no es lesivo a los intereses y patrimonio de la entidad convocante, al tratarse de derechos prestacionales a los que tiene derecho la convocada.

5. Orden de conciliar por parte del Comité de Conciliación.

Según se observa a folio 73 del expediente, que el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Sociedades, decidió conciliar el presente asunto de manera unánime, a favor de Sara Cristina Niño Sánchez, por la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS (\$1.866.401,00) mcte.**

Lo anteriormente expuesto permite a ésta Jurisdicción, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 65A de la Ley 23 de 1991, **APROBAR** la conciliación extrajudicial suscrita ante la Procuraduría 195 Judicial I para Asuntos Administrativos el día 14 de febrero del 2020, por Sara Cristina Niño Sánchez, actuando en causa propia, y la abogado Cesar Julio Gallo Márquez, en calidad de apoderado de la **Superintendencia de Sociedades**, en razón a que el acuerdo conciliatorio se fundó en un objeto y causa lícitos, sin vicios en el consentimiento de las partes, y sin que con él se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico del ente público en lo que fue materia de conciliación, pues se trata de efectuar el pago de unos valores adeudados a un servidor público de la rama ejecutiva del poder público.

En relación con el plazo para efectuar el pago se determinó que el mismo se realizaría dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la incorporación de la integridad de los documentos necesarios para tal fin.

En virtud de lo expresado, el **JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE

PRIMERO.- APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL celebrada el 14 de febrero del 2020, dentro del expediente radicado con el número 796956 del 18 de diciembre del 2019, suscrita entre **SARA CRISTINA NIÑO SÁNCHEZ**, actuando en causa propia, y el abogado **CESAR JULIO GALLO MÁRQUEZ**, en calidad de apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, ante la Procuraduría 195 Judicial I delegada para Asuntos Administrativos.

SEGUNDO.-De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A., la Secretaría expedirá copia de este proveído con sus respectivos anexos, la cual prestará merito ejecutivo en los términos del art. 2.2.4.3.1.1.13., del Decreto único 1069 de 2015.

Para tal efecto, la parte interesada deberá consignar el valor de la certificación que asciende a la suma de seis mil pesos (\$6.000) en la cuenta del Arancel Judicial de

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No. 3-0820-000636-3 del Banco Agrario de Colombia.

TERCERO.-Una vez cumplido lo ordenado en el numeral anterior archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

CA

